

3. Estrategia y metodología de la intervención en edificios históricos. Una perspectiva desde la arquitectura y la arqueología

Luis Maldonado Ramos

Arqueólogo

Profesor titular E.T.S.A- U.P.M

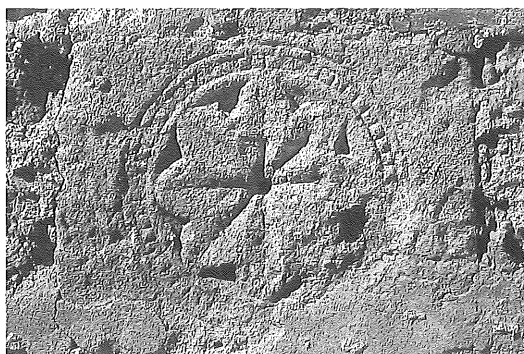
Fernando Vela Cossío

Arqueólogo

Profesor asociado, E.T.S.A-U.P.M

1. Introducción

A lo largo de los últimos veinte años ha venido desarrollándose en nuestro país una política de protección, conservación y rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico que, a pesar de sus desiguales resultados y su tantas veces escasa dotación económica, ha permitido afrontar de forma sistemática el mal estado general del patrimonio inmueble de carácter histórico-artístico. El desarrollo de esta política ha traído consigo un considerable aumento de la investigación en este ámbito, así como de la publicación y la difusión de trabajos relativos a temas como la teoría y la historia de la restauración, los criterios de conservación del patrimonio inmueble o las técnicas y procedimientos de intervención para la rehabilitación arquitectónica, por ejemplo. Sin embargo quedan por cubrir algunas áreas de investigación que ocupan espacios aparentemente colaterales con respecto a la restauración arquitectónica pero que progresivamente van demostrando su elevado interés en el ámbito general de la protección e intervención sobre el Patrimonio. En este artículo hemos querido llevar a cabo una breve incursión sobre una de estas áreas, la de la arqueología, mostrando algunos aspectos de su aplicación en el terreno de la arquitectura, como ciencia aplicada para el progreso de la historia de la arquitectura y la historia de la construcción, y como instrumento, a través de la utilización de su metodología, en proyectos de restauración y rehabilitación de edificios históricos.



1. Metopa románica de la iglesia de San Miguel Arcángel de Ayllón (Segovia).

2. El marco normativo

En la legislación española existen diversas disposiciones que garantizan la protección del patrimonio arqueológico. Debemos remitirnos, en primer lugar, a la propia Constitución Española que señala en su Artículo 46: *Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico y de los bienes que lo integran cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad.* También existen disposiciones (Art.148) referentes a la asunción de competencias para su gestión y protección por parte de las Comunidades Autónomas. La Ley del Suelo se refie-

re asimismo a dicha protección, otorgando la categoría de Suelo no Urbanizable a aquel que contenga excepcional valor paisajístico, histórico y cultural. La *Ley de Patrimonio Histórico Español* de 1985 integra, en su título preliminar, dentro del Patrimonio los inmuebles y muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, el patrimonio documental y bibliográfico y los yacimientos y zonas arqueológicas. Puede consultarse igualmente el *Artículo 41* en el que se determina que *Forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles e inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma continental. Forman parte asimismo de este patrimonio los elementos geológicos o paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes y antecedentes*. El artículo define asimismo lo que son excavaciones, prospecciones y hallazgos casuales, expresando que las excavaciones y prospecciones deben ser autorizadas por la administración competente, que garantizará la idoneidad de los trabajos científicos relacionados con éstas.

La gestión del Patrimonio Arqueológico queda así en manos de las administraciones públicas competentes en tres niveles: Nacional, a través del Ministerio de Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional; Regional, a través de las Comunidades Autónomas y sus correspondientes Servicios Territoriales de Arqueología (normalmente de ámbito provincial) y Local, a través de las Corporaciones Municipales que, aunque no tienen capacidad expresa en materia de gestión del Patrimonio Arqueológico, pueden -mediante las normativas urbanísticas por ejemplo- colaborar de manera muy eficaz a su protección.

En el municipio de Madrid se han definido diferentes Zonas Arqueológicas, como la correspondiente al Recinto Histórico, con inclusión de la superficie de la ciudad hasta la cerca del siglo XVII (1989), o las Terrazas del Manzanares (1990) (Mena 1991: 203-216). Otro buen ejemplo lo puede constituir el caso de Alcalá de Henares (Méndez Madariaga 1991:267-289). Cuando se haya procedido a la declaración de zonas arqueológicas como Bienes de Interés Cultural (B.I.C.) se redactará un Plan Especial de Protección u otros instrumentos de planeamiento incorporados al Plan General, lo que permite *condicionar las licencias de obra a que a priori se investigue el patrimonio arqueológico subyacente* (Op.Cit. 269).

En Alcalá de Henares se establecen cuatro áreas con cuatro grados de protección de mayor a menor interés: A) que incluye zonas en las que está proba-

da la existencia de restos arqueológicos relevantes; B) que cubre áreas de probada existencia de restos que requiere la verificación de su calidad para establecer el destino urbanístico del terreno; C) que incluye zonas de muy probable aparición de restos arqueológicos, aunque puedan encontrarse incompletos o deteriorados; y D) zonas donde se puede suponer que los restos serán de menor importancia o que su localización no está determinada (Op.Cit. 274). Las actuaciones en la zona A), por ejemplo, requieren la excavación arqueológica preventiva de los solares y la emisión de un Informe Arqueológico relativo a la superficie afectada. Estos trabajos deberán ser llevados a cabo por un Técnico Arqueólogo Colegiado -en el de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid- que deberá contar con el oportuno permiso oficial emitido por la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid. La financiación de los trabajos arqueológicos correrá a cargo del promotor de las obras, quien podrá solicitar su ejecución de *oficio* a los Servicios Territoriales de Arqueología si no desea sufragarlos. El resultado de las labores preventivas determinará la calidad del yacimiento y la autorización, en su caso, de las obras previstas. También puede establecerse la oportunidad de una excavación exhaustiva e incluso la conservación *in situ* de los restos exhumados. En este caso, está prevista la compensación al promotor por parte del Ayuntamiento por la pérdida de aprovechamiento urbanístico (Op.Cit. 278-279)

Por tanto, como vemos, están a disposición de la Administración, en todos sus niveles, los recursos jurídicos suficientes para garantizar una correcta protección del Patrimonio Arqueológico. Sin embargo, el problema principal de buena parte de dicho patrimonio es precisamente su detección y el conocimiento cierto de su existencia. Conocemos desde antiguo yacimientos arqueológicos relevantes, ya excavados y estudiados -algunos exhaustivamente- y otros abandonados. Ahora bien, puede existir un importante patrimonio no conocido, porque no forma parte de esa red de yacimientos y no ha sido aún estudiado, ni siquiera inventariado. Uno de los principales objetivos de los distintos servicios de arqueología de las Comunidades Autónomas ha sido, o debería haber sido, la confección de un inventario y la catalogación del patrimonio arqueológico a través de lo que se denomina la *Carta Arqueológica*. Los Servicios de Arqueología de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, desde 1985 -año en que se asumen las competencias en materia de arqueología- ha centrado buena parte de sus esfuerzos en la elaboración de una carta arqueológica completa del territorio autonómico (Velasco Steigrad 1991). La elaboración de las Cartas Arqueológicas implica un esfuerzo tanto

humano y económico como de tiempo, muy considerable, lo que significa que mientras no se hayan redactado completamente, mediante la prospección sistemática del territorio, pueden existir yacimientos arqueológicos relevantes no documentados ni controlados.

3. Arqueología y Patrimonio Arquitectónico: Investigación e Intervención

Antes del desarrollo de los actuales modelos de gestión del Patrimonio Arqueológico era frecuente que si durante la ejecución de obras públicas o de edificación, o en trabajos de restauración de monumentos, aparecían restos arqueológicos de interés se paralizasen las obras y se procediese a llevar a cabo lo que solía denominarse una *Excavación Arqueológica de Urgencia*. Podían entonces plantearse diversos problemas: en primer lugar, podía producirse un perjuicio económico derivado de la propia paralización de los trabajos e incluso un perjuicio social por el retraso en la ejecución de infraestructuras fundamentales. Se podía producir igualmente un perjuicio científico, porque era plausible la destrucción de una parte de los restos antes de proceder a su estudio o porque la celeridad de los trabajos obligaba a excavar de manera precaria y no sistemática. Incluso en algunos casos se llegaba a ocultar el hallazgo para evitar problemas con la administración y se destruía sistemáticamente el yacimiento. Por otro lado, estas excavaciones de urgencia eran ejecutadas directa o indirectamente por la propia administración -puesto que no existía un colectivo de arqueólogos que ejerciese libremente su profesión- lo que se traducía además en una acusada tardanza a la hora de acometer los trabajos.

Desde hace más de una década se ha venido planteando progresivamente un modelo de gestión diferente, basado en el establecimiento de *Zonas Arqueológicas Protegidas* en las que, como hemos visto en el ejemplo de Alcalá de Henares, de manera previa a cualquier intervención deben realizarse trabajos de prospección intensiva o de excavación preventiva. Un caso similar puede ser el de las obras de restauración de monumentos o edificios que contengan valores históricos o artísticos en los que suele recomendarse, cuando menos, la realización de un *Seguimiento Arqueológico* de las obras. Entre las ventajas de este modelo, que no siempre ha recibido elogios por la totalidad del colectivo de arqueólogos -en especial por parte de los docentes- y cuya aplicación ha mostrado, es cierto, desiguales resultados, pueden destacarse las siguientes: 1º) Se han venido estableciendo con mayor claridad las zonas de inte-

rés arqueológico, con lo que han podido coordinarse los trabajos de excavación o documentación preventiva con antelación, sin necesidad de paralizar obras ya iniciadas. Se ha excavado más y con mejor financiación y, desde luego, con menor perjuicio sobre intereses de terceros. 2º) La financiación de los trabajos ha dejado de ser necesariamente pública y ha pasado a ser responsabilidad de los promotores privados, con lo que se han aumentado de manera general los recursos empleados en materia de arqueología, pudiendo reservarse los de origen público, siempre escasos, a proyectos de investigación muy relevantes, a la confección de las Cartas Arqueológicas y a la protección de los yacimientos más importantes o de aquellos que demandaban actuaciones preventivas de forma más perentoria. 3º) Se ha desarrollado un nuevo colectivo profesional, formado por los arqueólogos que se encargan de la dirección y ejecución de estas intervenciones de manera inmediata, por lo que la ejecución de las labores preventivas no depende de la disponibilidad de la administración, cuyos servicios territoriales presentan, normalmente, escasa dotación de personal técnico.

En este sentido creemos conveniente recordar que el desarrollo de la *Arqueología de Intervención* en el ámbito urbano y en el de la construcción de infraestructuras *pocas veces ha sido objeto de enfrentamientos entre intereses contrapuestos y más aún ha servido para despertar una conciencia ciudadana en favor de la protección del patrimonio* (Méndez Madariaga 1991: 269). Salvo en casos excepcionales las intervenciones arqueológicas preventivas en el medio urbano se han venido efectuando en general con claridad y eficiencia, alejadas, desde luego, de los enfrentamientos que desde ámbitos ajenos a la propia disciplina y sus profesionales han sido llevados a la arena política en beneficio de intereses no estrictamente científicos, sean o no legítimos.

Por otra parte, el desarrollo de esta *Arqueología Profesional*, no ha interferido en absoluto en la política de investigación científica y en la excavación arqueológica de yacimientos relevantes, cuya financiación ha seguido dependiendo de las subvenciones con cargo a los presupuestos de instituciones y organismos públicos, y cuyos directores y ejecutores han seguido siendo, como siempre, profesores universitarios e investigadores adscritos a Museos o Institutos Científicos. No obstante, hemos asistido a un debate, todavía sin cerrar, entre ambos sectores -*investigadores y profesionales*- pero sobre el que se han ido estableciendo poco a poco algunos aspectos de interés general para todos, conviniéndose en la necesidad de mejorar la capacidad investigadora del



2.



3.

profesional, fomentar la publicación de los resultados obtenidos y coordinar las intervenciones de urgencia en proyectos generales de interés científico que redunden en una ampliación del corpus teórico y metodológico de la arqueología española. En general podría recomendarse un *mejor desarrollo científico de la Arqueología de Gestión* y una *mayor promoción social de la Arqueología de Investigación* (Buriillo et al.1994: 37). Aún cuando admitamos que no puede establecerse una dicotomía entre Arqueología de Investigación y Arqueología de Gestión sino entre modelos de Gestión del Patrimonio Arqueológico (Hornos Mata 1994: 12), no debe olvidarse que la arqueología profesional se desarrolla en parámetros distintos de la investigación científica en tanto que la excavación debe realizarse en el menor tiempo posible para facilitar el desarrollo de las obras que la



4.

2. Arquerías de ladrillo en el recinto histórico de Sepúlveda (Segovia).

3. Iglesia parroquial de Santa Catalina, La Solana (Ciudad Real). Desde 1998 el templo se encuentra en proceso de restauración. Arquitecto, Luis Maldonado Ramos.

4. Torre del reloj de la iglesia de Santa Catalina, La Solana (Ciudad Real). Además de los trabajos habituales de prospección y supervisión arqueológica de las obras de restauración del templo, se ha propuesto una intervención arqueológica específica para la investigación de la torre del reloj. Arquitecto, Luis Maldonado Ramos; Arqueólogo, Fernando Vela Cossío.

generaron o para permitir la modificación puntual o parcial de los proyectos originales con celeridad.

4. Arqueología e intervención en restauración de monumentos

La participación de arqueólogos en los equipos multidisciplinares que formados por arquitectos, historiadores, aparejadores, ingenieros y otros especialistas permiten abordar con la suficiente competencia la tarea de intervenir en los edificios históricos, es científicamente necesaria y debería ser normativamente inevitable. La complejidad del trabajo de documentación y toma de datos para la redacción de proyectos de restauración arquitectónica así como la necesidad de disponer de una evaluación externa,

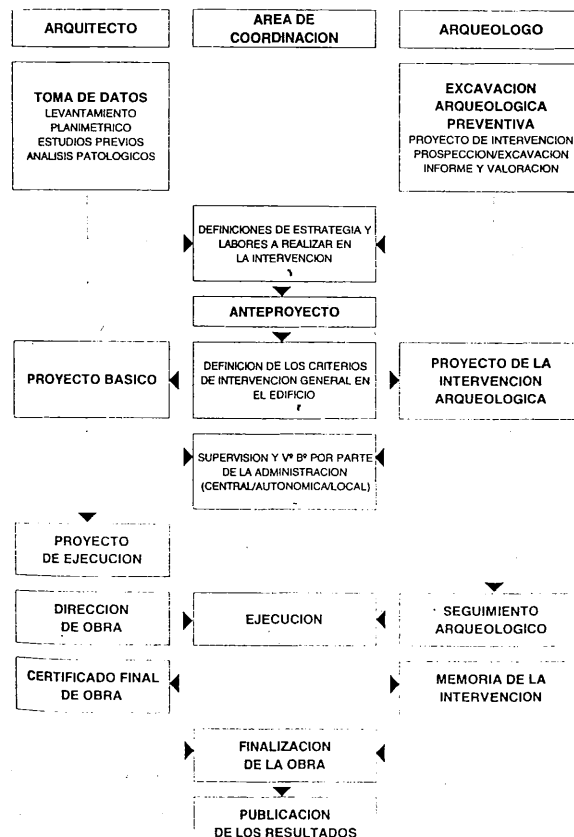
previa a la toma de decisiones, llevada a término desde una perspectiva no estrictamente arquitectónica, parecen razones del suficiente peso como para justificar la incorporación de estos profesionales a los equipos de trabajo, tanto en las labores de proyecto como en las de dirección de obra, o más concretamente, en aquellas correspondientes a lo que podemos denominar *seguimiento arqueológico* de la intervención.

Sin embargo es constatable la existencia de un cierto grado de desconfianza en las relaciones que rigen la colaboración profesional entre arqueólogos y arquitectos, y podría afirmarse que, posiblemente, obedece más a la mutua ignorancia de la clase de labores a acometer y de la metodología empleada para su resolución por parte de los miembros de cada uno de estos colectivos que a la existencia de un verdadero conflicto de intereses profesionales. Muchos de los problemas que se plantean habitualmente están relacionados más directamente con la estructura del organigrama de gestión del patrimonio que los propios profesionales se afanan por elaborar que con la aceptación final de las prioridades en la ejecución de una restauración, que no son otras, no lo olvidemos, que las que impone la salvaguarda de los valores del edificio en conjunción con el destino funcional que la sociedad le quiere dar. Ahí se encuentra el verdadero vértice de la pirámide: arqueólogos, historiadores, arquitectos, están al servicio del Patrimonio y no al revés. Por otra parte conviene recordar que, hoy por hoy, en lo que se refiere a conservación e intervención en el patrimonio histórico inmueble, el colectivo profesional en el que se deposita la responsabilidad de las labores de redacción de los proyectos y dirección de las ejecuciones es desde luego el de los arquitectos. Dejando a un lado los aspectos globales relativos a la definición de las estrategias generales, el establecimiento de las prioridades y la financiación de las intervenciones, responsabilidades que recaen en la Administración del Estado, los verdaderos interventores del patrimonio histórico inmueble en España son los arquitectos, aunque ello sea en ocasiones como consecuencia de la propia legislación sobre edificación civil. Por ello es especialmente importante despertar en este colectivo un mayor interés con relación a la problemática de la actuación arqueológica. Si bien es cierto que cada día es mayor el número de arquitectos formados o interesados en recibir formación específica en este campo, como lo atestigua, por ejemplo, el creciente desarrollo de módulos sobre arqueología en los cursos de postgrado, es igualmente importante reconocer que apenas se instruye a los estudiantes de las escuelas de Arquitectura con relación a las características de las intervenciones arqueológicas

en obras de conservación, restauración o rehabilitación de edificios históricos. La reciente reforma, ahora en fase de revisión, de los nuevos planes de estudios de la Arquitectura debería proporcionar el marco idóneo para atajar las actuales carencias, aunque se hiciese exclusivamente sobre la posibilidad de que figurase en los currículos académicos alguna asignatura optativa (Maldonado y Vela 1998).

Por todo ello, nos ha parecido oportuno incluir aquí un esquema elemental de coordinación entre arquitectos y arqueólogos, a tener en cuenta durante las distintas fases de definición, establecimiento de criterios de intervención, redacción de proyectos de restauración y dirección de la ejecución de las obras en edificios de interés histórico, artístico o arquitectónico. La necesidad de contar con los equipos multidisciplinarios bien formados que requiere la adecuada gestión de nuestro abundante patrimonio debería obligar a todos los colectivos implicados a poner los medios para atajar las actuales carencias formativas detectadas, en especial, en lo que se refiere a restauración.

C.1. Intervenciones en edificios históricos



5. Tipos de intervenciones arqueológicas en restauración y rehabilitación

En general podemos hablar de tres tipos generales de actuaciones arqueológicas con relación al patrimonio edificado: preventivas, programadas y de urgencia. Tanto las preventivas, base sólida para una correcta gestión del patrimonio histórico, como las de urgencia, poco deseables, quedan en manos de la Administración del Estado, fundamentalmente a través de las Comunidades Autónomas, que tienen transferidas como hemos visto las competencias en materia de arqueología. Las que podemos llamar programadas son, de forma corriente, las que vamos a encontrar inscritas en los proyectos de restauración de monumentos o edificios de interés histórico o artístico. Estas actuaciones requieren la autorización de la Administración Autonómica, que la concede mediante la expedición de un Permiso de Excavaciones Arqueológicas al director técnico y científico de los trabajos, un arqueólogo, sobre el que recae la responsabilidad de coordinar y dirigir la intervención. En estos casos los promotores de los trabajos arqueológicos pueden ser los municipios, las parroquias, las empresas inmobiliarias y constructoras o los propios particulares.

Las actuaciones preventivas por antonomasia suelen ser, como parece razonable, la declaración de los Bienes de Interés Cultural, la delimitación de zonas arqueológicas protegidas para su inclusión en la normativa urbanística de las provincias o los municipios, y la redacción de las correspondientes Cartas Arqueológicas y de los inventarios de bienes inmuebles de interés histórico, artístico, arqueológico, etc. Están todas ellas financiadas por la propia Administración, que designa o contrata a los técnicos y especialistas competentes para su ejecución, delegando en ocasiones la coordinación de los trabajos a instituciones u organismos de reconocida competencia en la materia a tratar, como Departamentos o Institutos universitarios, Institutos de investigación científica, etc.

Las actuaciones llamadas de *urgencia*, a las que ya nos hemos referido anteriormente, suelen venir impuestas de manera imprevista durante la ejecución de obras civiles, de infraestructuras o de otro carácter, en las que se detectan, a menudo demasiado tarde, restos arqueológicos que pueden ser susceptibles de ser estudiados, catalogados y preservados adecuadamente antes de su destrucción y posible traslado, o que por su importancia, producirán la alteración del proyecto original para garantizar su conservación *in situ*. Por fortuna este tipo de intervenciones son hoy la excepción que confirma la

regla, de manera que no es habitual que se lleven a cabo actuaciones en cascos históricos o en zonas protegidas sin la programación de intervenciones arqueológicas aparejadas a las mismas.

Por último, las actuaciones programadas se inscriben normalmente dentro de proyectos de adecuación urbana o de restauración arquitectónica, que son los que nos ocupan. La legislación, como hemos visto, obliga en numerosas ocasiones a la realización de estudios previos a cualquier intervención sobre el patrimonio inmueble, o condiciona su ejecución a una supervisión o seguimiento arqueológico durante las obras. La financiación de estos trabajos suele correr a cargo de los promotores de las obras (municipios, instituciones, empresas o particulares, como ya mencionamos) y son éstos los que proponen al arqueólogo competente para la realización de dichos trabajos. No obstante, es la Administración Autonómica la que le autoriza y designa en última instancia como director científico y técnico al expedir a su favor el correspondiente Permiso de Excavaciones Arqueológicas. Para ello, una vez contratados los trabajos previstos con el promotor, el arqueólogo deberá redactar un Proyecto de Intervención Arqueológica para su visado por parte de la Consejería competente, habitualmente la de Cultura, de la Comunidad Autónoma en la que se vaya a desarrollar la excavación, proyecto que suele incluir, además de la descripción, programación y calendario de las labores arqueológicas a llevar a cabo, un *curriculum vitae* completo del director de los trabajos y el presupuesto de la intervención. En este sentido, la legislación es taxativa. No es posible realizar intervenciones o excavaciones arqueológicas sin contar con la correspondiente autorización de la Administración, y éstas deben estar dirigidas por un arqueólogo competente. Quedaría por precisar qué es un arqueólogo competente pero, para simplificar, podemos definirle como un Licenciado en Filosofía y Letras o en Geografía e Historia que, siguiendo las recomendaciones de la Asociación Profesional de Arqueólogos de España (Querol y Martínez Díaz 1996: 62-65), esté especializado en Arqueología o que acredite una formación en la disciplina arqueológica. En este sentido, constituye un problema aparte el hecho de que en España no exista de manera oficial la titulación de Arqueólogo (Querol y Martínez Díaz 1996: 56), es decir, no existan *Licenciados en Arqueología*. Se expiden en nuestras universidades títulos de *Licenciado en Geografía e Historia* en sus distintas secciones o especialidades (Prehistoria, Historia Antigua, etc.) y desde la puesta en marcha de los nuevos planes de estudio de *Licenciados en Historia* con itinerarios curriculares en los que la arqueología puede ocupar un lugar destacable, pero está pendiente la organi-

zación de las enseñanzas superiores que conduzcan a la obtención de un título de *Arqueólogo*. Para paliar esta situación se han venido configurando en los últimos años Comisiones profesionales de Arqueología en los Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados y se creó en 1983 la Asociación Profesional de Arqueólogos de España (APAE), a la que han seguido otras asociaciones de carácter autonómico (Castilla y León, Galicia, etc.)

Dentro del grupo de actuaciones programadas conviene distinguir, según su escala, distintos tipos de intervenciones. En el artículo anterior se han abordado ya las características de los trabajos de investigación que sobre el monumento pueden realizarse desde la perspectiva del *Análisis Arqueológico de Construcciones Históricas*. Hemos visto que la lectura estratigráfica de paramentos es un instrumento eficaz de toma de datos, facilita la interpretación de la historia del complejo edificado a varias escalas (ciudad/barrio/edificio), ayuda a programar y proyectar la restauración de los inmuebles protegidos y sirve para progresar en el conocimiento de la historia de la arquitectura y de la historia de la construcción, tanto durante la fase proyectual como durante la ejecución de las obras, que nos irá dejando a la vista aspectos inéditos del propio edificio. Estos trabajos operan sobre los depósitos horizontales y verticales de la obra construida, incluyendo sus cimientos, pero no persiguen estrictamente el conocimiento de los depósitos arqueológicos que pueden acompañar al propio edificio: una necrópolis por ejemplo. El estudio y la salvaguarda de toda esta información arqueológica debe canalizarse a través de una intervención en el subsuelo que establezca su posible valoración y estado antes de iniciarse las obras, y que permita, durante las mismas, obtener información estructurada y contextual del yacimiento propiamente dicho. Para ello se programan intervenciones a distintas escalas cuya intensidad suele obedecer a la evaluación previa que exista sobre el edificio (carta arqueológica, zona protegida, etc.) o que el investigador considere conveniente. Estas intervenciones pueden organizarse, de forma muy esquemática, en los siguientes grupos:

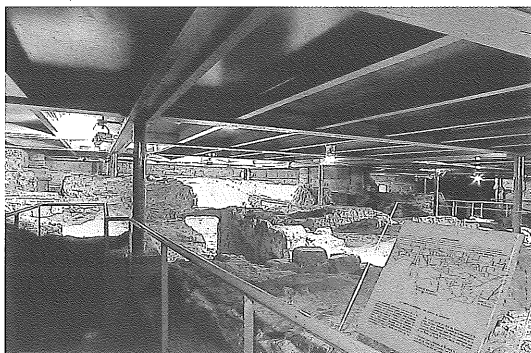
- Sondeos estratigráficos.
- Excavaciones en área.
- Seguimiento arqueológico de las obras.

Los sondeos tienen por objeto conocer de antemano la situación estratigráfica del subsuelo del edificio a intervenir. Constituyen la medida preventiva más sencilla y económica de cuantas se pueden programar con anterioridad a la restauración de un edificio. Distribuidos de forma estratégica en el edificio,

nos informan acerca de la fundación del edificio, nos revelan intervenciones posteriores a la misma (soleras, distintos niveles de pavimentos, restos de muros, divisiones interiores, etc.) y nos ayudan a evaluar las características de todos estos elementos y sus relaciones. Una vez realizados, de los resultados obtenidos puede concluirse la necesidad de llevar a cabo una excavación en área que, previamente a cualquier intervención restauradora, determine las características y estado de conservación del yacimiento. Muy frecuentemente es suficiente con su simple detección, de manera que se puedan disponer aquellos medios que eviten cualquier menoscabo en su conservación, dejando pendiente la excavación arqueológica para que se pueda ejecutar con los medios económicos necesarios y en los plazos adecuados más adelante.

Las excavaciones en área suelen venir impuestas por la riqueza e importancia del yacimiento descubierto o por la intensidad de las propias obras de restauración que ocasionalmente pueden incidir de forma más directa sobre aquellas áreas del inmueble que, requiriendo un mayor grado de saneamiento (sótanos, soleras, recalces, etc.), conservan gran cantidad de información histórica que debe ser preservada. Normalmente, requieren una financiación extraordinaria separada del propio proyecto de restauración (lo que no suele suceder con los sondeos o con el seguimiento arqueológico de las obras) y esto mismo las dificulta enormemente. Por otra parte, la *rentabilidad social* de la restauración de un inmueble está casi siempre fuera de toda duda mientras que difícilmente se puede justificar la inversión de varios millones de pesetas en la excavación del pequeño yacimiento arqueológico que contiene una iglesia románica o un lienzo de muralla cuando en el mismo municipio existen edificios históricos que se están cayendo por la falta de recursos para la conservación de sus cubiertas, por ejemplo. En este sentido y desde una perspectiva de *rentabilidad patrimonial* y de asignación de recursos y financiación, la arqueología habrá de conocer tiempos mejores en el futuro, porque en el presente es, para muchos, un verdadero lujo.

En cualquier caso siempre se debería llevar a cabo, al menos, un seguimiento arqueológico de las obras de restauración. Este seguimiento permitirá supervisar las propias obras al tiempo que facilitará un conocimiento más completo del edificio. Es muy corriente que en las intervenciones programadas en las que se llevan a cabo de forma preventiva sondeos estratigráficos, se proceda posteriormente al seguimiento arqueológico de todas aquellas unidades de obra que impliquen vaciados de terreno, recalces de cimentación, obras de saneamiento,



5.

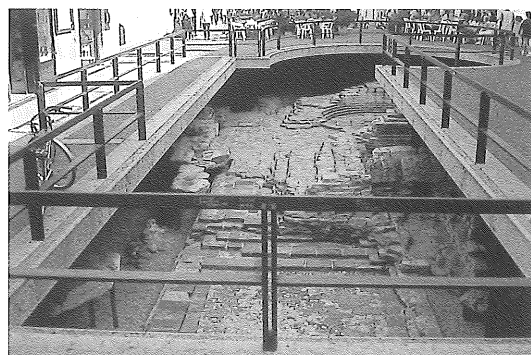
5. Iglesia de Santa Eulalia de Mérida. Zona arqueológica visitable. Arquitecto: Horacio Fernández del Castillo.



6.

6. Iglesia de Santa Eulalia de Mérida. Interior del templo. Arquitecto: Horacio Fernández del Castillo.

7. Restos arqueológicos de la ciudad romana de Verona (Italia). Dispositivos de exposición al público.



7.

canalizaciones de servicios y cualquier otro tipo de intervención susceptible de dañar el yacimiento arqueológico de manera irreparable. Los sondeos previos nos habrán servido para *tantear* el estado del subsuelo de manera que durante la ejecución de las obras no nos encontraremos con grandes sorpresas; es más, habremos delimitado con bastante precisión aquellas zonas que requieran un tipo de ejecución más cuidadosa, habremos programado la excavación en área de ser necesario, y habremos impedido, en último caso, cualquier remoción del terreno sin antes haber llevado a cabo una investigación arqueológica previa o haber dispuesto los medios para la correcta supervisión de cuantas acciones se vayan a ejecutar en nuestro yacimiento.

6. Las intervenciones arquitectónicas en yacimientos arqueológicos

Un capítulo aparte en la problemática que rige las relaciones arquitectura/arqueología es el de las intervenciones arquitectónicas en los yacimientos arqueológicos. Los proyectos de conservación *in situ* y de musealización de ruinas y yacimientos arqueológicos son un excelente punto de encuentro entre la actividad arquitectónica y la arqueológica. En los últimos años se ha publicado mucho sobre creación y construcción de museos en los propios yacimientos, sobre la puesta en marcha de parques arqueológicos, sobre zonas arqueológicas en edificios históricos, etc. En este sentido, convendría distinguir entre

las actuaciones arquitectónicas realizadas sobre grandes yacimientos arqueológicos y las actuaciones, normalmente más modestas en lo cuantitativo, llevadas a cabo en edificios en los que, conservándose su uso original o rehabilitándose para otros distintos, se integran restos arqueológicos originales que quedan abiertos al público y pasan a engrosar la oferta educativa o turística del propio inmueble. En los dos casos, el reto del arquitecto es la comprensión del espacio original, su sentido, sus características, superado lo cual el trabajo de creación del nuevo ambiente se ha de entender como la búsqueda del punto de encuentro entre el investigador y el visitante, entre la ciencia y su divulgación.

El primer grupo excede con mucho el ámbito del presente trabajo, por lo que remitimos al lector directamente a la bibliografía disponible, que no es poca (Querol y Martínez Díaz 1996). Del segundo grupo, más afín al tema que estamos tratando, podemos destacar algunos ejemplos recientes, como el de la Iglesia de Santa Eulalia de Mérida, en la que, como consecuencia de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo entre 1990 y 1993, se documentaron diversas estructuras romanas, así como una necrópolis y una basílica paleocristiana. La intervención arquitectónica, dirigida por Horacio Fernández del Castillo, ha permitido restablecer el culto religioso del templo facilitando al mismo tiempo la visita de los restos arqueológicos de su subsuelo mediante la instalación de un forjado ligero de estructura metálica. La intervención incluye asimismo la propia adecuación de la iglesia y una zona de exposiciones y recepción de los visitantes (Fernández del Castillo 1998).

Este tipo de actuación es hoy muy corriente, tanto en España como en otros países de su entorno europeo; baste para ello recordar algunas de las intervenciones llevadas a cabo en el subsuelo de la Plaza del Pilar de Zaragoza, en distintos puntos de la ciudad gótica de Barcelona o en la propia ciudad de Madrid, por no recurrir a casos más célebres si cabe, como el del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, obra de Rafael Moneo. Respecto a Europa podemos destacar algunas intervenciones llevadas a cabo en la ciudad romana de Verona, en la catedral de Bruselas, etc. Los norteamericanos han llevado a cabo experiencias bastante curiosas, como es el

caso de la *Franklin Court* de Filadelfia, un museo homenaje a Benjamin Franklin que ocupa el solar de su antigua casa junto a Market Street, en el centro histórico de esta ciudad norteamericana. Robert Venturi y su equipo llevaron a cabo en 1972 un proyecto por el que se construyó una estructura de acero fantasma que representa la volumetría de la mansión original; los restos arqueológicos se conservan *in situ* por debajo del nivel de la calle para hacer posible su visita (Sanmartín 1986: 76-77).

7. Bibliografía

- BURILLO, F. IBÁÑEZ, E.J. Y C. POLO (1994): "El Patrimonio Arqueológico en el medio rural". Conservación arqueológica. Reflexión y debate sobre teoría y práctica (pp. 36-49). Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico-Instituto Español de Arquitectura. 141 p.
- Comisión Profesional de Arqueología del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid (1990): Defensa y Gestión del Patrimonio Arqueológico. Madrid.
- (1993): "Los mecanismos de la arqueología de intervención en la Comunidad de Madrid". Boletín Colegio Oficial Doctores y Licenciados de Madrid, núm.45 (pp. 26-30)
- F. VELASCO STEIGRAD (1993): "Hacia un modelo de gestión y desarrollo profesional. Boletín Colegio Oficial Doctores y Licenciados de Madrid núm. 41 (pp.22-26).
- FERNÁNDEZ DEL CASTILLO SÁINZ, H. (1998): "Acondicionamiento y musealización de la iglesia de Santa Eulalia de Mérida". R&R Restauración y Rehabilitación, núm. 21, octubre 98 (pp.62-67). Madrid: Prensa Española.
- HORNOS MATA, F. (1994): "Reflexiones acerca del Patrimonio Arqueológico inmueble y su conservación". Conservación arqueológica. Reflexión y debate sobre teoría y práctica (pp. 10-17). Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico-Instituto Español de Arquitectura. 141 p.
- MALDONADO RAMOS, L. Y F. VELA COSSÍO (1998): "De Arquitectura y Arqueología". Madrid: Ediciones Munilla-Lería. 173 p.
- MENA MUÑOZ, P. (1991): "Arqueología urbana en el término municipal de Madrid (1985-1990)". Arqueología, Paleontología y Etnografía núm. 1 (pp. 201-216). Madrid: Comunidad Autónoma de Madrid.
- MÉNDEZ MADARIAGA, A. (1991): "La protección del Patrimonio Arqueológico. El ejemplo de Alcalá de Henares". Arqueología, Paleontología y Etnografía núm. 2 (pp. 267-290). Madrid: Comunidad Autónoma de Madrid.
- QUEROL, M^a ANGELES Y B. MARTÍNEZ DÍAZ (1996): La gestión del Patrimonio Arqueológico en España. Madrid: Alianza Universidad. 438 p.
- SANMARTÍN, A. Ed. (1986): Venturi, Rauch & Scott Brown. Obras y proyectos 1959-1985. Barcelona: Gustavo Gili, 1986. 144 p.
- VELASCO STEIGRAD, F. (1991): "El programa de carta arqueológica en la Comunidad". Arqueología, Paleontología y Etnografía núm. 1 (pp. 257-280). Madrid: Comunidad Autónoma de Madrid.